

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD REFERIDO AL PROYECTO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BOLETÍN N° 3875-11

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión Especial de Discapacidad pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en un Mensaje, con urgencia calificada de Simple.

En este trámite reglamentario, la Comisión recibió en audiencia a la señora María Soledad Cisternas, Directora del Programa Jurídico sobre Discapacidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y el Presidente de la Confederación Nacional de Sordos de Chile, señor José Antonio Olivari.

La Comisión contó con la valiosa colaboración de los asesores del Ministerio de Planificación, señoras Andrea Soto, María Eugenia Mella y señor José Muñoz.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en sesión 39ª de 20 de junio del año curso, con todas las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, más los acuerdos modificatorios alcanzados en la Comisión, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES

Se encuentran en esta situación, considerando el tratamiento recibido en el primer y segundo trámite reglamentario, los siguientes artículos: 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 18; 22, (pasó a ser 23); 25, (pasó a ser

26); 27, (pasó a ser 28); 30, 31, 32, 33, 34 y 35, (pasaron a ser 31, 32, 33, 34, 35 y 36, respectivamente); 37, (pasó a ser 38); 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y 49, (pasaron a ser 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 50, respectivamente); 53, (pasó a ser 54); 55, 56 y 57, (pasaron a ser 56, 57 y 58, respectivamente); 59 y 60, (pasaron a ser 60 y 61, respectivamente); 63, (pasó a ser 64); 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, (pasaron a ser 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 74, respectivamente); 74, (pasó a ser 75); 76, 77, 78 y 79, (pasaron a ser 77, 78, 79 y 80, respectivamente), permanentes, y segundo, tercero y cuarto transitorios, disposiciones todas que deben entenderse reglamentariamente aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

Para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 30 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Comisión reitera que los artículos 47, (que pasó a ser 48); 64, inciso tercero, que pasó a ser 65; 65, que pasó a ser 66, y 71, que pasó a ser 72, tienen rango de norma orgánica constitucional, por lo que deben ser votados separadamente.

II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO

La Comisión reiteró que tienen rango de norma orgánica constitucional, las siguientes disposiciones del primer informe reglamentario: artículos 47, que pasó a ser 48; 64, inciso tercero, que pasó a ser 65; 65, que pasó a ser 66, y 71, que pasó a ser 72. Asimismo, y con el mismo rango, en este trámite, el párrafo final del inciso segundo, del artículo 26, que pasó a ser 27, por las razones que se indican, en los casos que se señalan:

-Artículo 26 (pasó a ser 27); la modificación introducida en este trámite, otorga nuevas facultades a las direcciones de obras municipales, cuestión que recae en materias propias del artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, sobre Funciones y Atribuciones de las Municipalidades;

-Artículo 47 (Pasó a ser 48); reviste ese carácter por incidir en materias propias de los siguientes artículos de la Constitución Política de la República, toda vez, que consigna un modo distinto de ingreso a las

instituciones públicas que se señalan, esto es, la reserva preferente de cupos para las personas con discapacidad: 38, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; 77, sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia; 84, sobre Organización y Atribuciones del Ministerio Público, y 118, inciso quinto, sobre Función y Administración de las Municipalidades;

-Artículo 64, inciso tercero, (Pasó a ser 65); Artículo 65 (Pasó a ser 66) y 71 (Pasó a ser 72), porque la organización del servicio público FONADIS, y sus organismos internos, prescritos en estos artículos, difieren de la establecida en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, según lo dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República.

3.- Normas de quórum calificado:

No hay en este carácter.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS

No hubo disposiciones suprimidas.

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS

La Comisión modificó, en la forma que se expresa a continuación-, los siguientes artículos permanentes: 1°; 2°; 3°, 4°; 5°; 13; 17; 19; 20; 21; 23, (pasó a ser 24); 24, (pasó a ser 25); 26, (pasó a ser 27); 28, (pasó a ser 29); 29, (pasó a ser 30); 39, (pasó a ser 40); 50, (pasó a ser 51); 52, (pasó a ser 53); 54, (pasó a ser 55); 61, (pasó a ser 62); 62, (pasó a ser 63); 72, (pasó a ser 73); y los artículos primero y quinto, transitorios.

En el debate, los representantes del Ejecutivo señalaron que las indicaciones presentadas en su gran mayoría por las diputadas señoras Cristi, Herrera, Turre y Valcarce y los diputados señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, se apartan de la idea central del proyecto, toda vez, que se vuelven a incorporar conceptos y redacciones propias de la actual ley, que precisamente se quiere modificar.

Algunos integrantes de la Comisión consideraron correctas las indicaciones porque pretenden establecer mayores garantías para las personas con discapacidad, como asimismo, permiten su plena integración en la sociedad. Del mismo modo, señalaron que durante la tramitación del proyecto en su primer trámite reglamentario, votaron a favor de muchas normas que, si bien avanzan en el sentido correcto, son claramente insuficientes, por lo que les pareció oportuno tratar de corregir esta situación a través de la presentación de indicaciones.

Otros parlamentarios se mostraron en desacuerdo con las indicaciones señaladas, por estimarlas incompatibles con las ideas contenidas en el proyecto de ley, coincidiendo con los representantes del Ejecutivo.

En vista de lo anterior, cabe precisar, que la diputada señora Marisol Turres, -en representación de las diputadas y diputados de las bancadas de oposición que presentaron casi la totalidad de las indicaciones que originaron este segundo informe-, se reunió con los representantes del Ejecutivo con el propósito de alcanzar acuerdos, todo ello, debido a que la primera de las indicaciones, mediante la que se pretende sustituir el artículo 1° del proyecto, -el que para el Ejecutivo constituye el marco referencial que informa todo el texto porque define cuál es el objeto de la ley-, fue aprobada por la mayoría de 3 votos a favor, -del señor Bobadilla, y de las señoras Turres y Valcarce-, y 2 en contra, de las señoras Allende y Muñoz.

Por lo anterior, y luego de la información a la Comisión de los acuerdos alcanzados, los que, por una parte, permitieron volver a discutir y votar el artículo 1°, -que sostiene todos los demás, y por la otra, introducir modificaciones concordadas al resto del texto, -en cuanto fue posible-, se acercaron las posiciones.

La Comisión, en consecuencia, acordó modificar los siguientes artículos, en la forma que se señala, por la unanimidad de sus integrantes presentes:

Artículo 1°.-

Se sustituye la expresión “hacer efectivo” por “asegurar”.

Artículo 2°.-

Se intercala, la siguiente letra d) nueva, pasando las actuales d) y e), a ser letras e) y f), respectivamente:

“d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la redacción propuesta agrega una nueva letra d), que define lo que se entiende por “entorno”, zanjando así la discusión acerca de si se comprende en este concepto ámbitos públicos y/o privados.

Artículo 3°.-

Se agrega el siguiente inciso final, nuevo:

“Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las discapacidades específicas que pretende suplir y se determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la discapacidad.”.

Se incorpora, producto de una indicación de las señoras Cristi, Herrera, Turre y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, la que fue considerada prácticamente en su totalidad, rechazando la Comisión solamente la frase final, “y el nivel socioeconómico del postulante”, a continuación de la palabra “discapacidad” con que termina.

Artículo 4°.-

Se reemplaza por el siguiente:

“Artículo 4°.- Persona con discapacidad es aquella que al interactuar con diversas barreras presentes del entorno económico, social, político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental, intelectual o sensorial de largo plazo, puede ver impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.

Un reglamento de los Ministerios de Salud y Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las personas con discapacidad, al entrar en vigor esta ley.”.

Respecto del inciso segundo, obedece a los elementos considerados por la Comisión de las indicaciones coincidentes presentadas, por una parte, por los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, y por la otra, de las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas

Los representantes del Ejecutivo estuvieron de acuerdo en que la norma aprobada presenta incertidumbre en torno a los parámetros para determinar la existencia de una discapacidad y su calificación, por lo que la redacción propuesta genera un piso mínimo. Así, se dio al texto el enfoque que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece, readecuándose el concepto de persona con discapacidad al agregar a las personas con discapacidad mental, ajustando los contenidos de los reglamentos y precisando que la incorporación de estos conceptos de ninguna manera vulneran o disminuyen los estándares que hoy se aplican a las personas con discapacidad, optándose siempre por la norma más beneficiosa, de acuerdo al sentido final del último inciso.

Coincidieron en que no todos los estándares internacionales validados por la Organización Mundial de la Salud son completamente aplicables, por lo que se hace necesario que el Ministerio de Salud regule esta materia. De esta manera, la construcción del protocolo de calificación que actualmente se realiza implica la adaptación de estos instrumentos y de la forma de cuantificar a la realidad chilena.

Destacaron que los mecanismos a utilizar en esta materia servirán para el diagnóstico, para una mejora en la legislación y también para el mejoramiento de las políticas públicas, y que en resumen contienen una visión de la discapacidad, en el sentido de que lo que discapacita no es una condición de salud, sino la relación de una persona que tiene una condición negativa con el entorno, y por lo tanto éste es el elemento principal al que hay que atender y cómo la persona funciona en este entorno.

Manifestaron que este reconocimiento normativo permitirá que, en materia de discapacidad, en nuestro país se hable el mismo lenguaje que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, sumándonos así a las políticas de discapacidad en forma global.

Artículo 5°.-

Se elimina, en la letra a), del inciso primero, la expresión “arbitraria”, que sigue a la palabra “Discriminación”; y se intercala, entre los vocablos “restricción” y “fundada”, la voz “arbitraria”.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la redacción propuesta perfecciona la definición de la palabra discriminación, para los efectos de esta ley, estableciendo el elemento de arbitrariedad en dicho concepto.

Artículo 13.-

En su inciso primero, se sustituye la oración “instrumentos validados por la Organización Mundial de la Salud”, por “instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud”.

Artículo 17.-

Se incorpora, producto de una indicación de las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos a dichas acciones.”.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la indicación en cuestión les parecía inadmisibles, ya que comprometería su financiamiento a través de fondos fiscales.

Los miembros de la Comisión estimaron que la indicación en cuestión era plenamente admisible, ya que las acciones de fomento mencionadas en ella no necesariamente implican el desembolso de recursos fiscales. Así, la obligación del Estado de fomentar la creación de estos centros perfectamente puede cumplirse a través de su patrocinio en diversas actividades, o directamente su impulso a través de otro tipo de medidas.

Artículo 19.-

Se elimina, en su inciso primero, la expresión “acciones”.

Artículo 20.-

Se intercala, en su inciso final, entre los términos “derecho” y “a la rehabilitación”, la expresión “”, a lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario.”.

Artículo 21.-

Las señoras Cristi, Herrera, Turre y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una indicación para agregar el siguiente inciso tercero nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación.”.

Algunos miembros de la Comisión señalaron que el sentido de esta indicación es avanzar en algunos temas que actualmente se encuentran estancados, por ejemplo, existen excelentes centros de atención privados, pero que dependen de una suerte de colecta. al no contar con recursos establecidos en forma permanente. Concuerdan en que la indicación es meramente declarativa, pero cumple el fin de explicitar el compromiso que debe tener el país con la creación de centros de prevención y rehabilitación, tanto privados como públicos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que teniendo en cuenta que próximamente se someterá a ratificación por el Congreso Nacional la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es conveniente saber que este instrumento separa la rehabilitación del marco estrictamente sanitario; así, parte de la rehabilitación tiene que ver con temas sanitarios, y en otra parte, con el ámbito de la educación y servicios sociales, por lo que se está ampliando este concepto, esbozando una nueva forma de ver la rehabilitación. Recordaron, además, que en el proyecto de ley se plantea un esquema de rehabilitación en base comunitaria, por lo que una redacción como la propuesta en la indicación puede acotar las medidas a implementar.

La Comisión estimó que, más importante que la rehabilitación en base comunitaria, resulta más relevante lograr que las personas con discapacidad puedan tener acceso a centros especializados con alta

tecnología, con profesionales interdisciplinarios que colaboren en los procesos de rehabilitación.

En razón de lo anterior, las diputadas señoras Muñoz, Sepúlveda y Turres, y los señores De Urresti, Lobos y Sabag, presentaron una indicación, para agregar, a la indicación presentada en la Sala que incorpora un nuevo inciso, la palabra “integral”, antes del punto final, con el objeto de establecer que la prevención y rehabilitación perseguidas fuesen realizadas en esa forma.

En definitiva, y producto de las dos indicaciones, en el artículo en comento se incorpora, como inciso tercero, el siguiente texto:

“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral.”.

Artículo 23 (Pasó a ser 24)

Se intercala, en su inciso segundo, a continuación de la (,) que sigue a la expresión “fondos públicos”, el siguiente texto:

“la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales”.

La modificación que se introduce, en lo medular, es producto de una indicación de los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, la cual, la Comisión incorporó con algunas variables.

Artículo 24 (pasó a ser 25)

Se sustituye, mediante indicación de los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, por el siguiente:

“Artículo 24.- Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular la lengua de señas chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.”.

Se hace presente, que respecto de esta indicación, no se consideró la frase, “en particular la lengua de señas chilenas”, la primera vez que aparece, debido a que hace alusión al reconocimiento de la misma, cuestión que hoy día no es posible porque no existe una sola lengua de señas chilenas; la razón radica en que no está certificada como tal.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que este era un punto especialmente sensible para la población sorda. Así, agregaron, existe hoy día una necesidad urgente de realfabetizar, ya que muchas personas aprendieron formas arcaicas de la lengua de señas que hoy día ya no se usan. Del mismo modo, existen casi 10 dialectos de lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación que es muy difícil de realizar. Agregaron que incluso al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que usa en su comunidad particular.

Los parlamentarios presentes debatieron acerca de la necesidad de uniformar la lengua de señas, y sobre las formas de lograrlo, ya que se plantearon diferentes alternativas y si efectivamente al establecer que deberá usarse una lengua de señas chilena se lograría este objetivo. De este modo, se esbozaron diversas opciones sobre la forma en que podría tenderse a esta uniformidad.

Los representantes del Ejecutivo plantearon sus aprensiones frente a una posible obligatoriedad de una determinada forma de lengua de señas, porque podría resultar discriminatorio para quienes no utilizan el dialecto escogido. Respaldaron al mismo tiempo la idea de generar propuestas que permitan lograr esta uniformidad, destacando el papel que en esta tarea podrían cumplir los parlamentarios.

Del mismo modo, señalaron que debe tenerse especial cuidado con las obligaciones que se autoimpone el Estado y las que se imponían a las personas que sufren esta discapacidad, porque una cosa es que el Estado adopte una forma oficial para comunicarse con parte de la población, y otra es que se compeliere a esa misma población a utilizar exclusivamente esta forma de comunicación, lo que puede resultar atentatorio contra la libertad de esta parte de la población.

Con este objeto, la Comisión optó por eliminar la primera alusión a la lengua de señas chilena, toda vez, que así se establece una cierta gradualidad en la obligatoriedad de la norma.

Artículo 26 (pasó a ser 27)

1.-Se intercalan, en su inciso primero, entre las expresiones “toda” y “edificación”, la voz “nueva”; a continuación del término “colectiva”, la frase “y las antiguas”; y después de la palabra “jardines” las locuciones “pasarelas peatonales”.

Lo anterior, obedece a una indicación de las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas.

La Comisión acogió exactamente el contenido de las letras a), b) y c) de la indicación señalada, sin embargo, no ocurrió lo mismo con la letra d), que propone la alternativa de delegar la facultad de fiscalización que le compete a las direcciones de obras municipales -en cuanto al cumplimiento de las normas de constructibilidad de las vías de acceso para personas con discapacidad-, en personas naturales o jurídicas sin fines de lucro que actúen en el ámbito de la discapacidad. Lo anterior, porque estuvieron de acuerdo en que la fiscalización respecto de este tipo de normas es un tema altamente complejo, por su especificidad técnica; sin embargo, se discutió la posibilidad más bien de estimular la formulación de denuncias, incluso, a través de la participación ciudadana, pero sin delegar la función misma de la fiscalización.

La Comisión dejó constancia su acuerdo con la idea de fondo contenida en la indicación, porque sus integrantes estuvieron contestes en la falencia e imposibilidad real de efectuar la fiscalización que la ley ordena porque estas instituciones no dan abasto para el cumplimiento de estas funciones. Coincidieron con el Ejecutivo en que podría aclararse el sentido de esta norma, especificando que cualquier persona puede formular denuncias, ante el juzgado de policía local competente, destinadas a obtener el cumplimiento íntegro de las normas legales, ante una infracción.

Producto del debate, las diputadas señoras Cristi, Muñoz, Sepúlveda y Turres, y el diputado señor Sabag, concordaron dos indicaciones:

La primera de ellas, destinada a incorporar en su inciso segundo un párrafo que permita a las direcciones de obras municipales celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones, con el

objeto de mejorar el cumplimiento de sus tareas de fiscalización, con el siguiente texto:

“Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las Direcciones de Obras Municipales podrán celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones.”.

La segunda indicación, para incorporar un inciso final nuevo, que de cuenta de la posibilidad de cualquier persona de formular denuncias por incumplimiento de estas normas ante los juzgados de policía local competentes, con el siguiente texto:

“Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona.”.

Artículo 28 (pasó a ser 29)

La Comisión debatió respecto de la indicación presentada a este artículo por los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, destinada a agregar en su inciso tercero la obligación de que todos los medios de transportes deban contar con la señalización, alarmas, avisos y espacios suficientes para las personas con discapacidad auditiva y visual, para lo cual se obliga al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y al de Planificación a dictar las características de las exigencias, en los reglamentos respectivos.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que este tema se había analizado con anterioridad y que, en ese momento, las autoridades del Ministerio de Transportes se habían pronunciado negativamente. Aún así, manifestaron el compromiso del Ejecutivo de reingresar, durante la discusión del proyecto en el Senado, la idea de que fuera tarea del Ministerio de Transportes el velar por el cumplimiento de las normas de acceso de las personas con discapacidad, y no que quedara simplemente entregado a los mismos operadores de transporte, lo que se reflejaría en una indicación al inciso segundo de este artículo.

Algunos parlamentarios señalaron que la idea contenida en la indicación es de muy difícil implementación, y que lo que se pretende modificar era la inclusión de señalizaciones y alarmas de carácter auditivo y/o visual en todos los tipos de medios de transporte, que ni siquiera se utiliza en otros

países, y, en particular, dado lo rudimentario de algunos tipos de transportes, especialmente en las zonas más alejadas y extremas del país, es imponerles trabas que harán imposible su funcionamiento, más tomando en cuenta los graves problemas de conectividad existentes en esas zonas. Agregaron que también pueden producirse problemas en cuanto a la fiscalización, porque tanto en materia de transporte aéreo como marítimo son otras las autoridades encargadas de velar por su correcto funcionamiento.

La Comisión se manifestó partidaria de que esta exigencia pueda implementarse respecto de las nuevas naves o vehículos que se incorporen a estos servicios, toda vez, que no puede imponer ideas que choquen directamente con la realidad, sin perjuicio de considerar que la norma aprobada en el primer trámite es bastante completa.

En razón de lo anterior, acordó modificar la propuesta contenida en la indicación analizada, agregando la exigencia de las señalizaciones adecuadas para personas con discapacidad, en general, sin establecer ninguna en especial, introduciendo, en el inciso tercero, entre las expresiones “contar con” y “los asientos”, las palabras “la señalización”, seguida de una coma (,).

Artículo 29 (pasó a ser 30)

Los miembros de la Comisión discutieron ampliamente acerca de las indicaciones presentadas por las señoras Cristi, Herrera, Turre y Valcarce, y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, destinadas a hacer más efectiva la fiscalización del cumplimiento de una norma como la contenida en este artículo, referida al uso de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, en las edificaciones que, si bien se encuentran en recintos de uso público, se ubican en centros comerciales en los que la presencia de Carabineros era impracticable en forma permanente.

Algunos parlamentarios señalaron que la idea de la indicación es garantizar que las denuncias sobre mal uso de los estacionamientos destinados a personas con discapacidad efectivamente lleguen a ser conocidas por los juzgados de policía local, lo que si ocurriría si éstas fueran interpuestas ante Carabineros.

Otros integrantes opinaron que debe existir en esta materia una doble fiscalización, llevada a cabo en primer lugar por los guardias privados

con que cuentan los centros comerciales, los que pueden ejercer una labor de disuasión ante los infractores, y, en caso de persistir en la infracción, se pueda efectuar la denuncia ante Carabineros, especialmente tomando en cuenta que los centros comerciales serán solidariamente responsables de los perjuicios que el mal uso de estos estacionamientos causen.

A su respecto, la Comisión estimó conveniente generalizar el tema de las denuncias, estableciendo que éstas deberán efectuarse ante la autoridad competente, y modificando así la indicación presentada en este punto, que pretendía la denuncia ante Carabineros.

Con respecto a la segunda parte de la indicación, mediante la que se propone reemplazar el distintivo de la Cruz de Malta y similar como elemento que autoriza el uso de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, por aquél distintivo que señale la Ley de Tránsito, la Comisión acordó no limitar los medios por los cuales puede identificarse al vehículo de una persona con discapacidad y dejar el texto aprobado en el primer informe, no encontrando inconveniente en agregar las que se estimara conveniente, de acuerdo a la citada ley, sin perjuicio de la necesidad de regular en forma más detallada esta materia en el futuro.

En definitiva, la Comisión acordó agregar, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “denunciando”, la frase, “a las autoridades competentes”, e incorporar, a continuación del punto final que se sustituye por una coma (,), la oración “de acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito”.

Artículo 39 (pasó a ser 40)

La Comisión recogió la primera parte de una indicación presentada por la diputada señora Herrera, en cuanto considerar la opinión de los padres, tutores y del establecimiento educacional, para que una persona con discapacidad tenga la necesidad de acceder a la educación especial.

Por lo anterior, acordó intercalar, entre las palabras “efectos,” y “sin perjuicio”, el siguiente texto:

“los que deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos educacionales, del alumno y de su familia, cuidador o guardador,”.

Artículo 50 (pasó a ser 51)

En la Comisión de Hacienda, se presentaron y aprobaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados señores Aedo, Álvarez, Delmastro, Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Súnico y Von Mühlenbrock, para incorporar en el inciso primero, entre las expresiones “discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”.

Sus autores señalaron que es necesario dejar bien establecido que los beneficiarios de la ley son las personas con discapacidad, quienes podrán actuar, para efectuar ciertos trámites, representados por sus cuidadores o guardadores.

2.- De los diputados señores Álvarez, Delmastro, Dittborn, Lorenzini, Ortiz, y Von Mühlenbrock, para reemplazar en el inciso primero las palabras “podrán acceder” por “accederán”, con el propósito de hacer hincapié sobre el derecho que les asiste a las personas con discapacidad.

3.- Las siguientes indicaciones propuestas por el Ejecutivo:

a) Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US\$ 20.000” por “US\$ 27.500”.

b) Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US\$ 25.000” por “US\$ 32.500”.

c) Para sustituir en el inciso tercero el guarismo “US\$ 40.000” por “US\$ 47.500”.

d) Para intercalar a continuación del inciso quinto, el siguiente nuevo inciso:

“Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines.”.

La Comisión, aprobó, sin debate, por la unanimidad de los integrantes presentes, las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda, tanto por los diputados como por el Ejecutivo, toda vez, que apuntan en la

dirección correcta al otorgar mayores y mejores beneficios y derechos a las personas con discapacidad.

Artículo 52 (pasó a ser 53)

En la Comisión de Hacienda, se presentaron y aprobaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados señores Aedo, Álvarez, Delmastro, Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Súnico y Von Mühlenbrock, para incorporar entre las expresiones “discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”.

2.- Del Ejecutivo, para agregar, a continuación de la expresión “destinados al uso” la expresión “exclusivo”.

La Comisión aprobó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, la indicaciones señaladas.

Artículo 54 (pasó a ser 55)

En la Comisión de Hacienda, se presentó y aprobó la siguiente indicación:

- Del Ejecutivo, para agregar después de la palabra “Internos”, la primera vez que aparece, una coma (,) y la siguiente frase: “a solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en este párrafo,” y para sustituir la expresión “podrá autorizar” por la palabra “autorizará”.

Artículo 61 (pasó a ser 62)

La Comisión recogió parte de la indicación presentada por las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas en cuanto a incorporar un nuevo inciso tercero, con el propósito de reforzar las sanciones en caso de que no se cumpla lo ordenado por el juzgado de policía local, sin embargo, sus integrantes coincidieron en que no estaba del todo bien planteada en cuanto propone clausurar los edificios, y, en términos generales, cuando no se cumplan las medidas ordenadas por el tribunal. En este sentido, la Comisión concordó en que se implementara de igual forma una medida de clausura, pero sólo para el caso de que el incumplimiento se registre en un establecimiento, que sí puede estar sujeto a este tipo de medidas, y respecto de las medidas de accesibilidad.

En definitiva, aprobó incorporar un inciso tercero, del siguiente tenor:

“Para el caso de que el denunciado o demandado no adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente, o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de que se trate”.

Artículo 62 (pasó a ser 63)

Las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una indicación para incorporar un nuevo inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose de Personas Sordas, a excepción de aquellas que se comuniquen en forma oral, se le asignará además un Intérprete de Lengua de Señas Chilena acreditado para que la comunicación sea clara y transparente, y se garanticen adecuadamente sus derechos.”.

Los miembros de la Comisión compartieron el fondo de la proposición por la situación de indefensión en que pueden quedar las personas con discapacidad sensorial al enfrentarse al hecho de comparecer en un juicio sin contar con los elementos necesarios para establecer una comunicación fluida.

Sin embargo, tal como se plantea la indicación presentó reparos para la Comisión, toda vez, que por una parte, implica un gasto que deberá solventar el tribunal y no podría ser de iniciativa parlamentaria, y por otra parte, presenta la inconveniencia de establecer que la interpretación se hará por medio de la lengua de señas chilena, y, como se señaló con anterioridad, no existe certeza sobre cuál es esta lengua y, por lo tanto, no existe tampoco una forma de certificar su autenticidad.

En razón de lo anterior, propusieron una redacción alternativa de mayor amplitud que la comprendida en la indicación en cuestión, y que se refiere a las personas con discapacidad sensorial, como asimismo, pone de cargo del tribunal la labor de velar porque estas personas puedan comunicarse de manera clara y transparente, con el objeto de garantizar sus derechos.

En consecuencia, se agrega un inciso tercero, del siguiente tenor:

“En caso que comparecieran personas con discapacidad sensorial, el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan comunicarse clara y transparentemente, y acceder a los antecedentes del proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos”.

Artículo 72 (Pasó a ser 73)

Las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una indicación para insertar el siguiente inciso final:

“Los directores regionales serán elegidos según el Sistema de Alta Dirección Pública.”.

Los representantes del Ejecutivo expresaron sus reparos ante esta indicación la que consideraron correspondía a materias que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Justificaron su posición en que cada vez que se han incorporado servicios al Sistema de Alta Dirección Pública, se había realizado a través de normas iniciadas a través de un mensaje del Ejecutivo. Por otra parte, los llamados a concurso por tal motivo implicarían una serie de gastos para el erario nacional, lo que tampoco es materia en la cual los parlamentarios pudieran presentar iniciativas.

Sin embargo, los miembros de la Comisión dedujeron que, al estar ya incorporado el FONADIS al Sistema de Alta Dirección Pública, lo que corresponde es que obviamente los directores regionales también fuesen nombrados por esta vía, dado que son cargos del segundo nivel jerárquico, de acuerdo a lo establecido expresamente en el artículo trigésimo séptimo de la ley N° 19.882, que creó el señalado sistema, con lo cual, y de acuerdo al inciso primero de la norma mencionada, debe también su nombramiento ser entregado al mismo procedimiento, esto es, elegidos por concurso público.

Igualmente, la Comisión debatió sobre la conveniencia de agregar un plazo para la implementación de la norma, concretamente, para el llamado a concurso de los directores regionales; sin embargo, concluyó en que no era necesario porque el procedimiento estaba claramente establecido en la misma disposición.

En definitiva, la Comisión estimó que la indicación es admisible por la unanimidad de sus integrantes presentes y, procedió a su incorporación, en los mismos términos.

Artículo primero transitorio

Las señoras Allende, Cristi, Muñoz, Sepúlveda, Turres y Valcarce, y los señores Accorsi, Bobadilla, Lobos y Sabag, presentaron una indicación para agregar, en el artículo primero transitorio, el siguiente inciso final:

“El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, un lenguaje de señas chileno”.

Fundamentaron su indicación, en la imperiosa necesidad de que se implementen las medidas de aprendizaje, y la certificación correspondiente, tendientes a dotar al país de una sola lengua, común y universal, tanto indispensable para la comunidad con discapacidad auditiva como para los que no lo son, de manera, que en el futuro, cualquier persona pueda aprender un lenguaje de señas que permita interactuar e incluir a quienes no escuchan, en una sociedad de igualdad de oportunidades.

V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS

Se encuentra en esta situación el siguiente artículo, con el texto que se señala, el que fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes:

Artículo 22.-

“Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal.”.

Su incorporación se debe a una indicación presentada por las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, que la Comisión aprobó en cuanto a su primer párrafo, por considerar, que el segundo párrafo, es inadmisibles en cuanto ordena crear

instrumentos tributarios, iniciativa que corresponde exclusivamente al Presidente de la República.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la proposición está en sintonía con la accesibilidad universal que prescribe el artículo 6° de esta ley.

Los integrantes presentes coincidieron en la inadmisibilidad de la última parte de la indicación, aunque abogaron porque este tipo de medidas se recojan en una fase posterior de la tramitación de este proyecto de ley, porque la creación de incentivos tributarios constituiría una excelente oportunidad para destinar recursos para fines de habilitación de espacios arquitectónicos.

VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

No hay artículos en ese carácter.

VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS

-Artículos rechazados: _

No hay.

-Indicaciones rechazadas:

La Comisión rechazó, por unanimidad, las siguientes indicaciones:

Al artículo 1°:

1.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.”.

2.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) reemplazar la expresión “hacer efectivo” por “garantizar”.

b) suprimir la expresión “plena”.

c) insertar después de la expresión “discriminación” el adjetivo “arbitraria”.

Al artículo 2°:

3.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) intercalar en su letra b) después de la expresión “entornos” la expresión “públicos”.

b) insertar en su letra b) después del sustantivo “personas” la frase “dentro de sus capacidades”.

c) intercalar en su letra c) después de la expresión “entornos” la expresión “públicos”.

d) insertar en su letra c) antes de la conjunción copulativa “o”, la segunda vez que figura en el texto, la frase “dentro de sus capacidades”.

Al artículo 3°:

4.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) Eliminar en su inciso primero la expresión “y equiparación”.

b) Insertar en su inciso segundo después de la expresión “discapacidad.” la primera vez que aparece la frase: “de acuerdo a las características particulares de sus carencias.”.

c) Eliminar en su inciso segundo, después de la expresión “discapacidad”, la segunda vez que aparece, la oración:

“a través del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. “.

d) La última parte de la indicación “y el nivel socioeconómico del postulante”.

Al artículo 4°:

5.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en su inciso primero la frase “de ejercer o participar en una o más actividades de la vida diaria,” por la siguiente “su capacidad educativa, laboral o de integración social en a los menos un tercio,”.

Al artículo 5°:

6.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para intercalar en su letra a), entre las expresiones “restricción” y “fundada” la siguiente expresión: “carente de justificación”.

Artículo nuevo propuesto:

7.- De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente artículo 5° bis:

"Artículo 5° bis: De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos:

- a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
- c) Transportes.
- d) Bienes y servicios a disposición del público.
- e) Relaciones con las administraciones públicas.

La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido en esta ley que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en las materias antes enunciadas."

Al artículo 6°:

8.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) Intercalar entre las expresiones “discriminación” y “por” la expresión “arbitraria”.

b) Reemplazar la frase “compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.” por la siguiente: “compensar una o más limitaciones funcionales motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.”

Al artículo 7°:

9.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) En su inciso primero, insertar a continuación de la expresión “discriminación” la expresión “arbitraria”.

b) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión “entornos” la expresión “públicos”.

c) En su inciso segundo, insertar después de las expresiones “procedimientos” la expresión “públicos”.

d) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión “discriminación” la expresión “arbitraria”.

e) En su inciso tercero, agregar después de la palabra “ciudadanos”, la expresión “, a espacios públicos”.

Al epígrafe del Párrafo 2°:

10.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar el epígrafe del Párrafo 2° de su Título I, por el siguiente: “De las mujeres y los niños y niñas con discapacidad, y de las personas con discapacidad por causa mental”.

Al artículo 13:

11.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas eliminar en su inciso primero las frases que sigue a continuación de la palabra “Planificación”.

Al artículo 19:

12.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para suprimirlo.

Al artículo 20:

13.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 20.- La rehabilitación tiene por finalidad permitir a las personas que presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, que dificulte su integración social, educativa o laboral, mediante el acceso a las prestaciones y servicios oportunos y necesarios, la recuperación de la funcionalidad y su mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.”.

Al artículo 23 (Pasó a ser 24):

14.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar el artículo 23, por el siguiente:

“Artículo 23.- El Estado garantizará que en los informativos diarios de la televisión abierta se incluya la traducción simultánea a la Lengua de Señas Chilena, en su Edición Central, como también el sistema de subtitulado oculto, Closed Caption. Asimismo, garantizará su inclusión en la franja electoral que emitan los medios de comunicación audiovisual, campañas de prevención nacional financiadas con fondos públicos, debates presidenciales y en cadenas nacionales de televisión, a fin de mantener debidamente informada a la población sorda, garantizando sus derechos constitucionales.

El Estado velará porque en todos los proyectos que se presenten para obtener financiamiento estatal para la elaboración de material audiovisual, sea a través de FONDART, Consejo Nacional de Televisión, Fomento al Cine Chileno, etc., se exija la inclusión de subtitulado para personas sordas.”

15.-De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En la redacción del reglamento a que se refiere el artículo primero transitorio de la presente ley, se deberá propender a que en las ediciones centrales de los informativos diarios de la televisión abierta, a lo menos, se incorpore programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad auditiva.”.

16.- De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Las entidades de derecho público cuyo objetivo sea financiar proyectos audiovisuales de carácter cultural, adoptaran las medidas conducentes a incentivar la incorporación de subtitulado para personas con discapacidad auditiva en los proyectos que les sean presentados por la vía de concurso. Dichas entidades podrán celebrar convenios con otras personas jurídicas de derecho privado para incentivar la plena incorporación de las personas con discapacidad auditiva o sensorial al acceso de bienes culturales.”.

Al artículo 24 (Pasó a ser 25):

17.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar las expresiones “La lengua de señas” por las expresiones “La Lengua de Señas Chilena”

18.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar la expresión “fomentar” por “financiar”.

Al artículo 26 (Pasó a ser 27):

19.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

“d) Insertar en su inciso segundo a continuación del punto a parte (.) que pasa a ser seguido (.), lo siguiente:

“Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las Direcciones de Obras Municipales podrán delegar dicha fiscalización en personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones, sin fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad.”.

Al artículo 28 (Pasó a ser 29)

20.- De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:

“Todos los medios de transporte colectivo, aéreos terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, alarmas de avisos para las personas con discapacidad auditiva y/o visual, los asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que deberá ser suscrito por los Ministros de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación.”.

Al artículo 29 (Pasó a ser 30)

21.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para:

a) Insertar en su inciso tercero a continuación de la expresión “denunciando” las expresiones “a Carabineros de Chile”.

b) Eliminar en su inciso tercero las expresiones “el correspondiente distintivo (Cruz de Malta y similar) y”.

Al artículo 36 (Pasó a ser 37)

22.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar la expresión “garantizará” por “propenderá”.

Al artículo 38 (pasó a ser 39)

23.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar la expresión “de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios” por la voz “necesarios”.

Al artículo 39 (Pasó a ser 40)

24.- De la señora Herrera, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La opinión de los padres, tutores legales y el establecimiento educacional a que concurra, será siempre considerada y, si el

caso lo amerita, tendrán el derecho de solicitar la reconsideración de los informes o resoluciones indicados en el inciso anterior, a objeto que no afecten a los alumnos a que se refiere la norma. Asimismo, podrán recurrir de apelación ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Regional constituida para el efecto.”.

25.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para los efectos señalados en el inciso anterior, los padres y los establecimientos o escuelas de las personas con discapacidad deberán ser siempre escuchados y si fuere del caso, tendrán derecho a pedir la reconsideración de la resolución o informe que afecte a los alumnos a que se refiere esta disposición y a recurrir de apelación ante las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.”.

Al artículo 61 (Pasó a ser 62)

26.- De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, respecto solamente de la última oración del nuevo inciso tercero que se incorpora, del siguiente tenor:

“o persona que no de cumplimiento a las normas sobre accesibilidad.”

Artículo nuevo propuesto:

Del señor Fuentealba, para agregar en el Título VI el siguiente artículo 62 bis:

“Artículo 62 bis.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal, el siguiente número 21:

“21. Cometer un delito contra la propiedad o persona de una persona discapacitada.”.

Al artículo primero transitorio

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para eliminar en el inciso segundo la expresión “44”.

VIII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

La Comisión concordó en que las siguientes indicaciones tienen ese carácter:

El párrafo final del artículo 22 nuevo, que se intercala mediante la indicación presentada por las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, del siguiente tenor:

“especialmente deberá crear instrumentos tributarios que favorezcan la eliminación de barreras arquitectónicas ya existentes”.

Al artículo 45 (Pasó a ser 46)

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agrega una letra f) nueva del siguiente tenor:

“f) Financiar talleres o programas especiales de capacitación para personas con discapacidad que no tienen derecho a impetrar la subvención a la que se refiere la ley de subvenciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.”.

Al artículo 51 (Pasó a ser 52)

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar una nueva letra j) del siguiente tenor:

“j) Equipos, elementos y tecnología necesaria para la adaptación y/o habilitación de vehículos de manera que puedan transportar o bien ser manejados por personas con discapacidad.”.

Al artículo 58 (Pasó a ser 59)

De la señora Herrera para agregar la siguiente letra g):

“g) Realizar un catastro de las personas mayores y discapacitados inscritos en los registros electorales, con el objeto de establecer registros de votación separados para ellos, ubicados en un lugar preferente en el primer nivel de los locales de votación.”.

Al artículo 64 (pasó a ser 65)

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en la letra d) el punto y coma, por lo siguiente:

“y especialmente promover la presente normativa en términos que sean entendibles por todas las personas;”.

Al artículo 75 (pasó a ser 76)

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar el siguiente inciso final nuevo:

“No obstante lo anterior, los recursos que anualmente administre el Fondo Nacional de la Discapacidad deberán asignarse en un 80% por concurso público.”.

Al artículo primero transitorio

De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en el inciso tercero la expresión “ocho años” por la expresión “2 años”.

X.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE

- El proyecto de ley deroga la ley N° 19.284, sobre la plena integración de las personas con discapacidad.
- Modifica el artículo 154 N° 7 del Código del Trabajo.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las razones que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión Especial de Discapacidad, recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Título preliminar

Objeto, principios y definiciones

Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

Artículo 2º.- En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.

Para todos los efectos se entenderá por:

a) Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.

c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible.

d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital.

e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.

f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen.

Artículo 3º.- Es deber del Estado garantizar el derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. Las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.

El Estado ejecutará programas y creará apoyos destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos.

En la ejecución de estos programas y en la creación de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas con discapacidad que se pretende beneficiar.

Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la discapacidad.

Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno económico, social, político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental, intelectual o sensorial de largo plazo, puede ver impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.

Un reglamento de los ministerios de Salud y Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las personas con discapacidad, al entrar en vigencia esta ley.

Artículo 5º.-Para los efectos de esta ley, se entiende por:

a) Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.

b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente.

c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor autonomía funcional.

d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la vida

diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco.

e) Dependencia: El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida.

TITULO I

Derecho a la igualdad de oportunidades

Párrafo 1º

De la igualdad de oportunidades

Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educativa, laboral, económica, cultural y social.

Artículo 7º.- Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso.

Se entiende por exigencias de accesibilidad, los requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal.

Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Párrafo 2º

De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad

Artículo 8º.- El Estado promoverá el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su condición de género y discapacidad.

Artículo 9º.- El Estado adoptará todas las medidas necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades de recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida posible.

En toda actividad relacionada con niños y niñas con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses superiores.

Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho a recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en discapacidad o agravar la ya existente.

Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su discapacidad.

La rehabilitación de las personas con discapacidad por causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos.

Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia a través de prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad económica, tipo de servicio y costo del mismo.

La atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social.

TÍTULO II

Calificación y certificación de la discapacidad

Artículo 12.- Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese ministerio, calificar la discapacidad.

El proceso de calificación de la discapacidad asegurará una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada.

Para los efectos de esta ley, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas.

La certificación de la discapacidad sólo será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

La calificación y certificación de la discapacidad podrá efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de las personas o entidades que lo tengan a su cargo.

Artículo 13.- Los criterios uniformes y procedimientos de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las normas e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud podrá establecer, mediante resolución, protocolos e instrucciones técnicas que permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes.

La calificación de la discapacidad deberá hacerse de manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los derechos y servicios que la ley contempla.

La calificación de la discapacidad deberá efectuarse dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días siguientes contados desde la fecha de la calificación.

Toda persona tiene derecho a la recalificación de su discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en hechos o

antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron lugar a la calificación.

Artículo 14.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a proporcionarlos.

Artículo 15.- Las personas que se encuentren en proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

En el evento de que por inactividad del interesado se paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo pena de declarar el abandono del procedimiento.

Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación administrativa de conformidad con la ley.

Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al Registro Nacional de la Discapacidad, para su inscripción.

TITULO III

Prevención y Rehabilitación

Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en su conjunto.

El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos, a dichas acciones.

Párrafo 1°

Prevención

Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente.

La prevención siempre considerará el entorno económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate.

Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o estrés.

Toda persona tiene derecho a información pública, permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho.

Párrafo 2°

Rehabilitación

Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más

actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que cause la discapacidad.

Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como objetivos principales:

- 1.- Proporcionar o restablecer funciones.
- 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional.
- 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que permitan la inclusión laboral y educacional.
- 4.- La interacción con el entorno económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate.

Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible.

Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación de su familia o de quienes las tengan a su cuidado.

El proceso de rehabilitación se considerará dentro del desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral.

Durante la rehabilitación se prestará asistencia en salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la familia.

TITULO IV

Medidas para la Igualdad de Oportunidades

Párrafo 1º

Medidas de Accesibilidad

Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal.

Artículo 23.- Toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.

Artículo 24.- Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación.

Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidas o emitidas con subtítulo y lengua de señas.

Artículo 25.- Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular, chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.

Artículo 26.- Las bibliotecas de acceso público deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos usuarios.

Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y las antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que preste un servicio a la comunidad, así como las vías públicas y los accesos a todos los medios de transporte público, parques, jardines, pasarelas peatonales y plazas, y los accesos a los bienes nacionales de uso público de interés histórico, cultural o recreacional, tales como bordes costeros, de lagos, ríos y centros turísticos, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. Si contaren con ascensores, éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas.

Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las actuales edificaciones y las obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a las disposiciones del inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de esta normativa será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona.

Artículo 28.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y permanentemente habitadas por una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o representante, con quienes ellas vivan.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir las viviendas destinadas a personas con discapacidad.

Artículo 29.- Para asegurar a las personas con discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros.

Los operadores de transporte deberán adoptar las medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte.

Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación.

Artículo 30.- Las edificaciones con destino industrial, toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta obligación.

El diseño de estos estacionamientos deberá considerar las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a las autoridades competentes, a los vehículos infractores. La administración de estos establecimientos será solidariamente responsable por el uso indebido de los estacionamientos para personas con discapacidad. Sólo podrán hacer uso de ellos los vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta y similares) y credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito.

Párrafo 2°

De los perros de asistencia para personas con discapacidad

Artículo 31.- Toda persona con discapacidad, tendrá el derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia de público.

Asimismo, estas personas, junto con sus perros de asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá por la normativa vigente.

Artículo 32.- El acceso, la circulación y la permanencia, en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo precedente, por parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con discapacidad, no quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán ser condicionados al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que para ello deba incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual deberá informarse previamente a quien lo requiera.

Artículo 33.- Para los efectos previstos en esta ley, se entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad.

Los perros de asistencia podrán ser entrenados para realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento.

Artículo 34.- Los perros de asistencia deberán estar debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que determine el reglamento.

Artículo 35.- Corresponderá al dueño del perro de asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás personas.

Las personas con discapacidad no podrán ejercer los derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se constituya en un evidente riesgo para las personas.

Artículo 36.- El entrenamiento de perros de asistencia estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de asistencia para su utilización y cuidado.

Párrafo 3°

De la educación y de la inclusión escolar

Artículo 37.- El Estado garantizará el acceso de todas las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según corresponda.

Artículo 38.- La Educación Especial es una modalidad del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para todos los educandos.

Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional.

Cuando la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas especiales.

Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la educación.

Artículo 40.- La necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, los que deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley.

Artículo 41.- Las escuelas especiales, además de atender a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten necesidades especiales.

Artículo 42.- El Ministerio de Educación cautelará la participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.

Las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras.

Asimismo, las instituciones de educación superior, deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias relacionadas con la discapacidad.

Artículo 43.- A los alumnos y alumnas del sistema educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio.

Artículo 44.- El Ministerio de Educación, establecerá mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria.

Artículo 45.- Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo.

Párrafo 4°

De la capacitación e inserción laboral

Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, especialmente deberá:

- a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación;
- b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación;
- c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con discapacidad, y
- d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.
- e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes.

Artículo 47.- El Estado desarrollará planes, programas e incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados.

Artículo 48.- La Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de condiciones y mérito, a personas con discapacidad.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.

Artículo 49.- La capacitación laboral de las personas con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus intereses.

Artículo 50.- Las personas con discapacidad podrán celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin limitación de edad.

Párrafo 5°

De las exenciones arancelarias

Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la importación de vehículos establecido por el artículo 6° de la ley N° 17.238.

En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso primero podrán tener un valor FOB superior a US\$ 27.500, sin considerar el mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US\$ 32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.

Los beneficios establecidos en este artículo serán aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al

transporte colectivo de personas con discapacidad. El valor FOB de dichos vehículos no podrá exceder de US\$ 47.500, sin considerar los elementos opcionales constitutivos del equipo especial para personas con discapacidad que señale el reglamento.

Los vehículos que se importen mediante la franquicia establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.

Los valores máximos establecidos en el presente artículo se actualizarán anualmente.

Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este artículo.

Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes:

- a) Prótesis auditivas, visuales y físicas;
- b) Órtesis;
- c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad;
- d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad;

e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad;

f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad;

g) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad;

h) Elementos y equipos de tecnología de la información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las letras anteriores, y.

i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad.

Artículo 53.- Sólo podrán impetrar el beneficio que otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, o representados por sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas atiendan.

Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta franquicia no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario.

La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse respecto de otra persona con discapacidad.

Artículo 55.- El Servicio de Impuestos Internos, a solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que devengue la internación de

los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley N° 17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los intereses fiscales.

Artículo 56.- Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren.

Artículo 57.- Todo aquél que solicite u obtenga indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario.

TITULO V

Del Registro Nacional de la Discapacidad

Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca el reglamento.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional de la Discapacidad.

Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad deberá:

- a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez;
- b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo soliciten, previamente certificadas por la COMPIN;
- c) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en este registro;
- d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal;
- e) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento, y
- f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento.

Título VI

Acciones Especiales

Artículo 60.- Sin perjuicio de las normas administrativas, y penales existentes, toda persona que por causa de acción u omisión arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas por sus dependientes o subordinados.

Artículo 61.- El que causare herida, trauma o muerte injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las cuentas veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si aquél no pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de la responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente.

Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de un acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.

Esta suma ingresará a las arcas del respectivo municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán en caso de reincidencia.

Para el caso de que el denunciado o demandado no adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de que se trate.

Artículo 63.- Las causas a que dieren lugar las acciones previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido en la ley N° 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien designe el juez sin costo para el actor.

Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos.

En la tramitación del recurso de apelación, se estará a lo dispuesto en la ley N° 20.146.

TITULO VII

Del Fondo Nacional de la Discapacidad

Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover el

proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las personas con discapacidad.

Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para identificarse en todos sus actos y contratos.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;

b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad;

c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal;

d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con discapacidad;

e) Ejecutar programas y proponer medidas que favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;

f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad;

g) Apoyar la participación y diálogo social e intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con discapacidad;

h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las personas con discapacidad;

i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la Discapacidad, y

j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley.

El Fondo Nacional de la Discapacidad estará organizado en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y direcciones regionales en cada región del país.

Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y cultural de las personas con discapacidad.

El Consejo se integrará como sigue:

a) El Ministro de Planificación, o su representante, quien lo presidirá y dirimirá los empates;

b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes;

c) Cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su carácter nacional.

d) Un representante del sector empresarial;

e) Un representante de organizaciones de trabajadores;

f) Dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y

g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su ministro de fe.

Los Consejeros no serán rentados en su calidad de tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente propuestos.

Artículo 67.- Son derechos de los consejeros:

a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz y voto, y

b) Acceder en forma completa y oportuna a los antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos concernientes al comité respectivo.

Artículo 68.- Son obligaciones de los consejeros:

a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.

b) Integrar periódicamente los comités que se designen.

c) Contribuir a la formación de la voluntad del Consejo.

d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los tengan un interés directo.

Artículo 69.- Son causales de cesación en el cargo de consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 65, las siguientes:

a) Expiración del plazo de su designación. Los Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez expirado el período para el cual fueron designados.

b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República.

c) Ser condenado por delito que merezca pena aflictiva.

d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.

e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o de FONADIS, sin estar facultado para ello.

f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo.

Si un consejero incurriere en una causal de cesación del cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del Ministro de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la República, quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate.

Artículo 70.- Corresponderá al Consejo:

a) Proponer las principales líneas de acción que deben orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento;

b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados por el Fondo Nacional de la Discapacidad;

d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos;

e) Constituir comisiones de trabajo integradas por consejeros o con personas ajenas al Consejo, y

f) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden.

Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros presentes.

El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes.

Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882.

Serán funciones del Director Nacional:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus acuerdos;

c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan de conformidad con la ley;

d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y funciones del Fondo;

e) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las funciones que estime necesarias;

f) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, y

h) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena marcha del servicio.

Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones impartidas por el Director Nacional.

Corresponderá al Subdirector Nacional:

a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o impedimento;

b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra materia que el Director Nacional le solicite;

d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el cumplimiento de las metas y compromisos institucionales;

e) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena marcha del servicio.

El Subdirector será nominado de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882.

Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo de un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:

a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Director Nacional;

b) Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos organismos del Estado a nivel regional;

c) Fomentar la participación social de las organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región;

d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas por el Director Nacional;

e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su disposición y dar cuenta anualmente;

f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y,

g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.

Los directores regionales serán nominados de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882.

Artículo 74.- El patrimonio del Fondo Nacional de la Discapacidad estará formado por:

a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos;

b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran al Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y por los frutos de esos mismos bienes;

c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación;

d) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,

e) Los recursos que pueda captar como resultado de trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con organismos públicos o privados.

Artículo 75.- Los recursos que administre el Fondo Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los siguientes fines:

1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, y

2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, rehabilitación e inclusión social de dichas personas.

Artículo 76.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas:

1.- Adquisición de ayudas técnicas: Se asignarán por medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con discapacidad.

2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: Se asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o extranjeros.

En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de la Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán destinarse al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades regulares.

Artículo 77.- Para la asignación y financiamiento de los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y debidamente fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información adicional.

Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad se registrarán por el Código del Trabajo y sus normas complementarias.

Un reglamento determinará la organización interna del Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse su actuación y funcionamiento.

Artículo 79.- Los actos del Fondo Nacional de la Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría General de la República, según las normas generales.

Artículo 80.- Derógase la ley N°19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la República dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos un treinta y tres por ciento cada año.

Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 45 deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento para cada año.

El acceso a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, sus organismos o las municipalidades, tales como, parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere el artículo 27, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de implementación de un cincuenta por ciento por cada año.

El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.

Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 N° 7 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los trabajadores”, una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado”.

Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los decretos con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda.

Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los antecedentes que las

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren imprescindibles para la continuidad del registro.

Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de seis meses, contado desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”.

Se designó Diputado Informante al Presidente de la Comisión, señor Jorge Sabag Villalobos.

Sala de la Comisión, a 11 de septiembre de 2007

Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a las sesiones de los días 04, 11 y 18 de julio; 01, 08 y 29 de agosto, y 05 de septiembre de 2007, con la asistencia de las señoras diputadas Isabel Allende Bussi, María Angélica Cristi Marfil, Adriana Muñoz D’Albora, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Marisol Turres Figueroa y Ximena Valcarce Becerra, y de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Sergio Bobadilla Muñoz, Alfonso De Urresti Longton, Juan Lobos Krause, Fernando Meza Moncada y Jorge Sabag Villalobos (Presidente).

Asistió, en reemplazo del diputado señor Enrique Accorsi Opazo (sesión N° 38 del 29 de agosto), el diputado señor Antonio Leal Labrín.

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comisión